

ANA INÉS LÓPEZ-ACCOTTO

Los Sin Tierra de Brasil: revisando el pasado

En este artículo se exponen las profundas raíces históricas de los conflictos actuales en torno a la tierra en Brasil. Se presenta además un panorama de las organizaciones existentes de campesinos y trabajadores rurales sin tierra, exponiendo también los principales conflictos en torno a la tierra y las respuestas represivas que de ellos resultaron. Finalmente, se presentan datos generales sobre la estructura económica de Brasil y, en especial, sobre su estructura agraria. Además, se presentan brevemente los programas agrarios lanzados durante el gobierno de Fernando H. Cardoso.

“A questão da terra no Brasil é tão antiga quanto o país. No princípio, era a terra para uns poucos e assim foi feito o país que temos hoje. Um país feito por uma elite que nunca levou em consideração o próprio povo, que dirigiu voltada para fora, deixandoum rastro de pobreza e miséria que cobre o território nacional. O latifúndio no Brasil nunca diminuiu, sempre cresceu e o resultado está aí: milhões de pessoas tentando sobreviver nas cidades e outros milhões na miséria, sem terra para trabalhar nos campos”.

Herbert de Souza (O Globo, abril de 1997)

En octubre de 1998, en pleno desarrollo de las elecciones presidenciales, se habrán cumplido 101 años del fin de la Guerra de Canudos, uno de los movimientos populares más violentamente reprimidos de la historia de Brasil. Se manifestó entonces la insatisfacción contra las oligarquías rurales de la República Vieja por parte de la población campesina, marginada y abandonada a su propia suerte. Ha pasado un siglo entero y el país ha cambiado profundamente, pero la cuestión agraria sigue pendiente.

Ana Inés López-Accotto es socióloga y colaboradora del Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Es coautora de diversos libros sobre temas sociopolíticos, basados en investigaciones con fuentes orales.

Durante la campaña electoral, el presidente y candidato Fernando Henrique Cardoso intentó vincular al Movimiento de los Sin Tierra (MST) con el narcotráfico. En su número de septiembre, la moderada revista *Veja* titulaba una nota al respecto, diciendo: "Habló de más. FHC insinúa que el MST está implicado con la marihuana". En sus desafortunadas declaraciones, Cardoso buscaba vincular el problema de la tierra en Brasil y el Movimiento que está presionando por soluciones de manera bastante pacífica, con la situación de violencia que se vive en Colombia. El intento de mezclar ambas cuestiones en plena campaña electoral no es inocente, ya que el MST manifestó públicamente su apoyo al candidato de la oposición, Inacio Lula Da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). El despropósito fue tan evidente que los propios expertos militares y policiales de la zona de producción de marihuana, Pernambuco, declararon a los medios que, más allá de algún episodio muy concreto, no les consta que exista indicio alguno de tal vinculación. El problema es que este tipo de planteamientos, así como las explicaciones de Cardoso para reunirse con el presidente de Colombia, pueden llevar a una campaña de desprestigio del MST, basadas en acusaciones sin fundamento y en una intoxicación informativa acerca de los móviles y métodos de los Sin Tierra. No sería la primera vez que se busca criminalizar un movimiento social incómodo para justificar acciones represivas. De ahí que un cierto repaso a la historia reciente parezca pertinente y de alguna utilidad.

Latifundios, monocultivo y mano de obra barata

La estructura agraria de Brasil nació bajo el signo del latifundio. Después del descubrimiento, el territorio fue dividido en 12 capitanías generales hereditarias, concedidas por el rey de Portugal a señores vinculados a la corona. Durante tres siglos prevaleció el monocultivo para la exportación —primero fue la caña de azúcar— que se basó en la explotación de mano de obra esclava llevada desde África. Tras la independencia de Brasil, en 1822, cambiaría el monocultivo —etapa del café— pero continuó la utilización de esclavos. En 1850, con la Ley de Tierras, las elites esclavistas establecieron la frontera agrícola al determinar que la posesión de tierras públicas sólo sería permitida mediante el pago de una alta suma de dinero. Esto impidió el acceso a la tierra a los blancos y mulatos pobres, los negros y los inmigrantes europeos que comenzaban a llegar a Brasil y que sustituyeron a los africanos tras el fin del tráfico de esclavos en 1851.

Pero la necesidad de poblar el sur del país determinó el desarrollo de una política de inmigración que concedió lotes de tierra a algunos contingentes de europeos. La mayoría de ellos progresó. Ello explica, en parte, que el estado de Rio Grande do Sul tuviera una estructura agraria más equilibrada, prácticamente sin latifundios y casi sin problemas de definición de títulos de propiedad. Entre 1884 y 1945 llegaron a Brasil más de cuatro millones de inmigrantes de origen europeo, expulsados de sus tierras de origen por la revolución productiva que se produjo a partir del siglo XIX. Muchos de los actuales dirigentes e integrantes de los movimientos organizados de trabajadores sin tierra son descendientes de aquellos agricultores pobres que expulsó Europa. La diferencia sustancial es que ahora ya no hay adónde emigrar. Los problemas tienen que ser encarados y resueltos en la propia casa.

Con la revolución de 1930 y la pérdida de poder de la oligarquía cafetalera se inició un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Se reconocieron derechos legales a los trabajadores urbanos y el Estado comenzó a jugar un papel central en el proceso económico, pero sin intervenir en el agro. El sector urbano-industrial fue incapaz de generar, en la cantidad y velocidad necesarias, los empleos para absorber el contingente que se trasladaba del campo a las ciudades. Expulsados del campo, esas familias constituyeron los batallones de mal empleados, subempleados o desempleados de las periferias de las grandes ciudades. Al final de la Segunda Guerra Mundial comenzó el debate sobre el agro, se presentaron decenas de proyectos de ley para la reforma agraria, pero no se aprobó ninguno.

A principios de los años sesenta tuvo lugar un proceso de organización de los campesinos y de creación de organismos públicos para la reforma agraria. Por una parte, surgieron las Ligas Agrarias, la Unión de Labradores y Trabajadores Agrícolas y el Movimiento de Agricultores Sin Tierra. Por otra, en 1962 se creó la Superintendencia de Política Agraria (SUPRA); al año siguiente se aprobó el Estatuto del Trabajador Rural, que regulaba las relaciones de trabajo en el campo. Y un año después, el presidente Goulart firmó un decreto que preveía la expropiación para fines de reforma agraria. Con el golpe militar de 1964, se inició un ciclo de dictaduras militares que duraría 21 años y que desarticularía a todas las organizaciones populares a través de una durísima represión.

El modelo económico impulsado por los militares promovió la modernización del latifundio a través del crédito rural, fuertemente subsidiado y muy abundante. En torno al desarrollo del cultivo de soja se produjo una mayor concentración de la propiedad de la tierra. Eran los tiempos del llamado “milagro brasileño” y el éxodo a las ciudades fue impresionante. A partir de 1970 comenzaron los programas de desarrollo regional y colonización de zonas poco habitadas, con traslados masivos de población proveniente del sur hacia el nordeste. Los resultados fueron magros y la concentración de la propiedad de la tierra continuó agudizándose.

En 1973, los obispos del nordeste del país aprobaron la declaración “Yo he entendido el clamor de mi pueblo”, y comenzó a cobrar fuerza la Teología de la Liberación. Dos años después se creó la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), que jugaría un papel clave en la reorganización de los campesinos sin tierra. Con su apoyo, en 1979 se creó una organización que con el tiempo sería el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), cuyo objetivo central era el de conseguir una reforma agraria que modificara sustancialmente la estructura económica, social y política del medio rural y del país en su conjunto. Ya entonces comenzó a tomar forma la ocupación de tierras como método de presión para la reforma agraria, en el marco de la lucha por la democratización del país. Y el Servicio Nacional de Informaciones (SIN) comenzó a vigilar a un joven economista, Joao Pedro Stédile, incluso mientras realizaba una maestría en México. No iban mal encaminados: 20 años después, el joven al que espiaban sería el coordinador del poderoso MST.

A principios de los años ochenta, con el fin del ciclo de la soja y el desempleo de miles de trabajadores rurales, se agravaron los conflictos por la posesión de la tierra en el norte del país, lo que llevó a la creación de un ministerio especial para las cuestiones agrarias y de propiedad de la tierra. Se lanzaron además nuevos planes de asentamiento y colonización, con escasos resultados. El gobierno de

*A principios
de los años
ochenta se
agravaron los
conflictos por
la posesión de
la tierra.*

Sarney elaboró un plan ambicioso de reforma agraria, con el objetivo de asentar a 1.400.000 familias a lo largo de cinco años, pero sólo consiguió el asentamiento de 90 mil. Durante el gobierno de Fernando Collor (1990-1992) se paralizó el programa de asentamientos. El gobierno de Itamar Franco (1992-1994) retomó los proyectos de reforma agraria y aprobó un programa de emergencia para el asentamiento de 80 mil familias, que alcanzó solamente a 23 mil. Es como intentar cazar elefantes con un tirachinas.

Así se llega al actual gobierno de Fernando Henrique Cardoso. En su campaña electoral planteó que no era factible resolver el problema de la injusta concentración de la tierra mediante la distribución de lotes en cuatro años. Prefirió adoptar un compromiso de promoción de la agricultura de base familiar y de formulación de una estrategia para generar más y mejores empleos en el área rural, con aumento de la producción, de la productividad y del salario real de los trabajadores. Se estableció la meta de asentar a 280 mil familias en los cuatro años de gobierno y se procedió a reorganizar los mecanismos institucionales para el desarrollo de la política agraria. Según datos oficiales, en dos años se asentó un total de familias equivalente al doble de todo lo que se había ejecutado con anterioridad: más de 100 mil familias. Se estima que a finales de 1998 habrían recibido su lote de tierra por lo menos 285 mil familias.

El problema del gobierno no es sólo el reparto de tierra: la cuestión central es asegurar programas y acciones articulados desde diversos ministerios e instituciones públicas para promover la supervivencia de los asentamientos: crédito subsidiado para el laboreo y la construcción de viviendas, caminos, silos, escuelas, centros de salud, alimentación de las familias, creación de cooperativas, entre otros. El gran desafío es garantizar la continuidad de los asentamientos una vez establecidos. Ya en 1985 se había creado el Programa de Crédito Especial para la Reforma Agraria (PROCERA) para financiar todo el proceso productivo de los asentamientos: costos de laboreo e inversiones y pago de la cuota a la cooperativa a la que se pertenece. Los asentados sólo deben devolver la mitad del crédito concedido. Si son para inversiones, tienen dos años de carencia y sólo se reintegra el 50% del financiamiento. Una vez cancelado un crédito es posible acceder a otro nuevo. Además de los instrumentos y programas que existían, el actual gobierno lanzó otros nuevos: se necesita una brújula para orientarse en el entramado resultante.

Los trabajadores rurales sin tierra están por la labor

Existen dos grandes organizaciones de trabajadores rurales que luchan por la democratización del acceso a la tierra y mejores condiciones de trabajo y salario en el campo: la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG)¹ y el Movimiento de los Trabajadores Sin-Tierra (MST).

En 1984 se constituyó el MST en el estado de Rio Grande do Sul. Confluyeron en él varios movimientos de izquierda, en general ligados a la Iglesia, a partir de una acción coordinada de ocupación de tierras ociosas. La movilización se

¹ La CONTAG está organizada en todo el país, tiene 5 millones de afiliados reunidos en 3200 sindicatos y 24 federaciones estatales.

intensificó después de la expulsión de las familias que ocupaban reservas indígenas en Rio Grande do Sul, en 1977, y de las que ocupaban las tierras inundadas por Itaipú, a partir de 1979. Las familias que dejaron las reservas formaron el primer gran campamento, en la carretera que une Passo Fundo y Ronda Alta, y después realizaron la primera gran invasión, la hacienda Annoni, en 1985. Eran 2 mil familias. En la misma época surgió el movimiento en Paraná, a partir de la movilización de los expulsados del área de Itaipú y de otros trabajadores sin tierra. En aquel estado se llegó a estructurar una organización precursora del MST, el Movimiento de Agricultores Sin Tierra del Sudoeste de Paraná. En 1984, en Cascavel (Paraná), se realizó el Primer Encuentro Nacional del MST. Ello explica el predominio en la organización de militantes provenientes del sur del país.

Como contrapartida, al año siguiente, los hacendados crearon la Unión Democrática Rural (UDR), una organización tan violenta como radical, que tiene por objetivo oponerse a cualquier intento de reforma agraria por parte del presidente José Sarney. Comenzaron a crecer las milicias privadas y la contratación de pistoleros para cometer asesinatos de líderes comunitarios y sindicales. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, entre 1985 y 1996 se cometieron 976 asesinatos de activistas de la reforma agraria. De esos casos, sólo se juzgaron 56, resultando de allí 7 condenas.

La gran mayoría de los conflictos sobre la tierra tienen su origen en la falta de títulos de propiedad y demarcación de las áreas ocupadas. La categoría más afectada son los pequeños agricultores que no son propietarios de las tierras que trabajan, sino que viven y producen en las grandes haciendas particulares poco utilizadas por sus dueños, o también en tierras públicas. Son los posseiros, víctimas constantes de los grileiros, los que practican la apropiación ilícita de las tierras por medio de la expulsión de sus habitantes y consiguiendo títulos de propiedad falsos. En los últimos años, esta situación se tornó especialmente violenta en algunas zonas, como en Pontal do Paranapanema, en el extremo oeste del estado de Sao Paulo, fronteriza con los estados de Paraná y Mato Grosso, y en el estado de Pará, al norte del país. En estas áreas se concentraron la mayoría de las acciones de reforma agraria durante 1997.

En la Conferencia Nacional en Defensa de la Tierra, el Trabajo y la Ciudadanía (Brasilia, 2-4 de abril), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) denunció que los gastos previstos para agricultura en los presupuestos federales habían disminuido, pasando del 2,8% en 1995, al 2,3% en 1996 y al 1,9% en 1997. Señaló que el continuo deterioro de las condiciones de vida en el campo también se manifiesta en el aumento de la violencia y de la impunidad por parte de los terratenientes y las autoridades locales: durante los dos primeros años del gobierno de Cardoso se produjeron 849 conflictos agrarios, en los que fueron asesinados 109 trabajadores. En ese período se produjeron las dos masacres más brutales, en Corumbiara² y en Eldorado do Carajás.³

² Agosto de 1995: se produjo la matanza de Corumbiara, en una operación de expulsión realizada conjuntamente por la policía militar y los pistoleros contra un campamento de campesinos sin tierra que habían ocupado la hacienda Santa Elina, en el estado de Rondonia. Fueron asesinados 10 colonos y, según denuncias eclesíásticas, más de 25 personas fueron ejecutadas y quemadas.

*La gran
mayoría de
los conflictos
sobre la
tierra tienen
su origen en
la falta de
títulos de
propiedad y
demarcación
de las áreas
ocupadas.*

De las 62 mil familias asentadas, 45 mil se hallaban en áreas de conflicto. De esas familias en áreas de conflicto, más de la mitad eran posseiros y 18 mil acampados en situaciones precarias, pero organizados por los movimientos sociales y viviendo en forma colectiva. Según datos del INCRA, en 1995 había 29.034 familias acampadas, de las cuales la cuarta parte habría sido ya asentada. En 1996, había cerca de 43 mil familias acampadas, de las que fueron asentadas el 41%. Los datos de 1997 indicaban que había en torno a 25 mil familias acampadas, de las cuales unas 20 mil estarían integradas en el MST y unas 5 mil en la CONTAG y otros movimientos. Según los datos del MST, en 1997 había 205 campamentos, albergando a un total de 48 mil familias sin tierra.

Los campamentos de los sin tierra se concentran fundamentalmente en cuatro estados: Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás y Pernambuco. Entre los cuatro albergan al 60% del total de acampados. Sin embargo, el 70% del área que el INCRA determinó en 1992 como grandes propiedades improductivas (una extensión que representa casi tres veces el territorio de Francia, por ejemplo), se encuentra en las regiones del norte y centro-oeste del país, en una zona próxima a la selva, densa e insalubre, sin caminos, energía ni comunicaciones. Otra buena parte se encuentra en la región del noreste, la mayoría en zonas con poca agua y de suelo frágil y poco apto para la agricultura, el sertao. De ahí que, si bien se admite que existe una disponibilidad de tierras suficiente para el cumplimiento de las metas de la reforma agraria, resulte sumamente exagerado afirmar que Brasil tiene 150 millones de hectáreas listas para atender a millones de familias sin tierra, bastando con que el gobierno decida su "desapropiación". Es necesario, además, considerar los límites impuestos por la protección ecológica y el problema de las áreas indígenas, muy mal o nada resuelto a lo largo de la historia del país. De la misma manera, la preservación de la selva amazónica y de la Mata Atlántica ha llevado a dirigentes de los movimientos sociales y estudiosos a plantear que no se trata de una única reforma agraria, sino de múltiples reformas agrarias cuyas características deben ser definidas en función de las características concretas de cada zona.

13 años después de su creación, el MST consiguió implantarse en 21 de los 27 estados del país. El MST ha ido asumiendo progresivamente el control sobre el proceso de la reforma agraria, escogiendo las tierras que deben ser expropiadas, por medio de las ocupaciones. Al principio, el gobierno tenía establecida la política de no expropiar tierra invadida, pero finalmente cedió a las presiones sociales.

³ Abril de 1996: tuvo lugar la masacre de 19 campesinos sin tierra en Eldorado do Carajas, al sur del estado de Pará (noreste). Unos 4500 campesinos, en camino hacia Belem, capital del Estado de Pará, marchaban en cortas etapas nocturnas, cuando el calor es menos insoportable. Querían exigir a las autoridades la expropiación de la hacienda Macaxeira, que ocuparían un mes después. El 17 de abril de 1996 ya se encontraban en Eldorado de Carajas. Por encima del campamento ondeaban las banderas rojas con el emblema del MST. El mayor Oliveira recibió la orden del gobernador de despejar la ruta. Inmediatamente, sin buscar una negociación, sin avisar, comenzaron a bombardear a los campesinos con granadas lacrimógenas y después abrieron fuego.

Si en 1997 el MST impulsó la invasión de 180 haciendas, en su IX Encuentro Nacional (febrero 1998), se decidió que la meta para 1998 sería la ocupación de 500 más. La respuesta de los terratenientes no se hizo esperar: el presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), Ernesto de Salvo, anunció que no tolerarían la amenaza del MST de triplicar las invasiones. “La única forma de superar el problema de las ocupaciones de tierra es aplicando la política de cero tolerancia”, afirmó. La estrategia de “tolerancia cero” es la que aplican los terratenientes del estado de Paraná (sur del país), organizando escuadrones de encapuchados que ejecutan a los campesinos y líderes del MST.⁴

Según datos oficiales, el ritmo de las invasiones ha ido creciendo vertiginosamente: en marzo de 1998, 13.118 familias ocupaban haciendas en todo el país, mientras que en febrero el número ascendía a 1790 familias. En febrero fueron invadidas 18 nuevas haciendas, mientras que en marzo se alcanzaron las 37 ocupaciones.⁵ Al mismo tiempo, una encuesta realizada en marzo señalaba que, si bien el 80% de los entrevistados considera justa la lucha de los campesinos por la reforma agraria, el 65% reprueba las ocupaciones promovidas por el MST.⁶

La hora de las urnas

El MST decidió dar su apoyo a la candidatura presidencial del Luiz Inacio “Lula” da Silva, el dirigente sindical y líder del Partido de los Trabajadores (PT), a través de cuyas listas intentará que salgan elegidos al menos 4 diputados federales.⁷ El objetivo es potenciar cada vez más la actividad parlamentaria, aumentando progresivamente el número de miembros en la Cámara de Diputados y en las Asambleas Legislativas estatales. El anuncio del apoyo del MST suscitó duras críticas desde el gobierno, a las que Lula respondió que cada uno tiene el apoyo que se merece: “Fernando Henrique tiene el de los banqueros y yo el de los campesinos”, afirmó.

En pleno año electoral, la situación social es explosiva: a las crecientes ocupaciones de los sin tierra se sumaron también las de los sin techo y los parados. Continúan los asesinatos de campesinos y líderes de los sin tierra. A principios de abril, el gobierno decidió enviar tropas del ejército a Parauapebas (estado de Pará, en el nordeste). La situación crítica provocada por la sequía en el nordeste del

*En pleno año
electoral, la
situación
social es
explosiva: a
las crecientes
ocupaciones
de los sin
tierra se
sumaron
también las
de los sin
techo y los
parados.*

⁴ Según la Federación de Trabajadores de Vigilancia Privados (FTVP), cerca de 600.000 personas trabajan en el estado de Paraná en empresas clandestinas de seguridad, contratadas por los terratenientes (*O Globo*, 14/II/98).

⁵ Estos datos fueron dados a conocer por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en abril de 1998.

⁶ La encuesta fue realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública (IBOPE), que ya había hecho otra seis meses antes, en la que el 89% de los entrevistados apoyaba las luchas por la reforma agraria. Según los técnicos, la diferencia de 9 puntos se explicaría por los métodos adoptados por el MST.

⁷ En las elecciones de 1994 consiguió un diputado, Adao Pretto, fundador del movimiento.

país estalló en ese mes, cuando los campesinos hambrientos abandonaron los campos y se dirigieron a las ciudades, saqueando los depósitos oficiales de alimentos y supermercados, contando con el manifiesto apoyo del MST. La Iglesia hizo oír su voz crítica al gobierno, una y otra vez, debido a la falta de políticas sociales eficaces, y justificó los saqueos motivados por el hambre.

En mayo de 1998, Amnistía Internacional dio a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, en el que se señala que siguen dominando las irregularidades judiciales y las agresiones contra agricultores sin tierra, indígenas y defensores de los Derechos Humanos. Se subraya que "una investigación encargada por el poder legislativo reveló que el número de personas asesinadas cada mes en el marco de operaciones policiales se duplicó desde mayo de 1995", y que "entre enero de 1993 y julio de 1996, 942 personas habían sido asesinadas por policías", la mayoría con una bala en la cabeza o en la espalda. El informe señala que "por todo Brasil, la policía y los escuadrones de la muerte vinculados a las fuerzas de seguridad, dieron muerte a centenares de personas en circunstancias que sugerían que podían haber sido ejecutadas extrajudicialmente". La situación de los miembros del MST también es un punto de atención de AI, que describe las irregularidades de los procedimientos judiciales contra los escuadrones de la muerte, cuyos miembros son, a veces, liberados.

No obstante, el último sondeo realizado a principios de julio⁸ indica que las intenciones de voto a favor de Fernando Henrique Cardoso superan la suma de todos los votos de sus rivales, abarcando el 42%, con lo que ganaría en la primera vuelta. La cuestión de la tierra no se presenta, precisamente, como un camino sembrado de rosas.

Nota del editor: el artículo fue escrito con anterioridad a las recientes elecciones de Brasil, en las que fue elegido F. H. Cardoso para un segundo periodo presidencial.

⁸ Realizado por O Globo/TVGlobo/IBOPE, entre los días 2 y 5 julio de 1998.

Brasil: ¿el país se ha quedado pequeño o el espacio está mal repartido?

Brasil es un país enorme: 8.547.403 kilómetros cuadrados de extensión, lo que lo sitúa como el cuarto país del mundo, tras Rusia, China y Canadá. Un tamaño equivalente a toda Europa. La Amazonia representa el 59% del territorio, el equivalente a diez veces el territorio de Francia. Un país que dispone de toda clase de recursos naturales y cuya área cultivable potencial es de 350 millones de hectáreas. La actividad agropecuaria supone el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), la industria el 30% y los servicios más de la mitad. En volumen, la producción de granos y carne ha continuado creciendo a lo largo del tiempo. Las importaciones de productos agrícolas llegaron a 3 billones de dólares en 1996, una cantidad casi equivalente al total de los recursos disponibles para la financiación de la cosecha. Dichas importaciones han sido casi exclusivamente de productos de la agricultura familiar, tales como leche, trigo, uva, algodón, porotos y caucho, generando una mayor pobreza en todas las regiones del país (Datos del Banco Central-RECOR, 2 de enero de 1997).

La población de Brasil es numerosa: según los datos del censo de 1995, era de 152 millones de personas, ocupando el quinto lugar tras China, India, Rusia y Estados Unidos. Del conjunto, 120 millones constituyen la población urbana y 32 millones viven en el medio rural. El proceso de urbanización fue brutal, si se tiene en cuenta que en 1950 la zona rural representaba el 70% de la población y hoy incluye un poco más del 20%. En su prisa por quemar etapas, Brasil abdicó de un proceso indispensable para crecer con más equilibrio y menos desigualdades, des-concentrando y fortaleciendo también a los más pequeños. En torno a 1992 el proceso de migración rural a las ciudades se detuvo y la población rural se mantiene desde entonces prácticamente estable. Una quinta parte de la población vive en ciudades de menos de 20 mil habitantes y han comenzado a crecer las ciudades medias del interior del país, lo que apunta una tendencia hacia la desconcentración y un mayor equilibrio en la distribución espacial de la población. Las tasas de natalidad y mortalidad infantil están declinando, acercándose lentamente a los patrones de los países desarrollados.

En cuanto a la estructura agraria, en las últimas tres décadas se observó una inversión cada vez mayor con fines especulativos, como reserva de valor. Ello se debió a diversos factores: en muchas regiones, el control de la tierra es una fuente de prestigio y de poder, que garantiza, por ejemplo, el control de los votos; la inestabilidad económica y el proceso inflacionario hicieron de la tierra una inversión segura; la posibilidad de regularizar ganancias de origen dudoso, ya que la legislación de puestos sobre la propiedad y la renta es muy flexible en el sector agrícola; la existencia de un Impuesto Territorial Rural más simbólico que real; el encubrimiento del impuesto a la renta; el acceso a crédito subsidiado, entre otros. En 1996, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) publicó el Atlas Fundiário Brasileiro, en el que se corroboró que la estructura de la tierra en el país no se alteró en los últimos 56 años, presentan un índice de concentración ubicado entre los más altos del mundo: las grandes propiedades constituyen el 2,8% pero disponen del 56,6% de las tierras, de las que más de la mitad son consideradas improductivas. De los 38 millones de habitantes del área rural, el 73% tiene una renta inferior a la línea de pobreza (es decir, ingresan menos que el equivalente a dos salarios mínimos), lo que sitúa a Brasil como la sexta peor distribución de la renta en el mundo. Ello se traduce en hambre: el 51% de los 31,5 millones de brasileños que sufren hambre se encuentra en el campo. Una sola región, el nordeste, alberga al 32% del total de pobres del país.

Respecto a los sin tierra propiamente dichos, las estimaciones sobre el tamaño del colectivo son dispares: según el Plan Nacional de Reforma Agraria de 1985, el universo oscila entre 6 y 7 millones de familias, incluyendo a ocupantes, arrendatarios, asalariados rurales y minifundistas. Según el Censo Agropecuario de 1985,

se sabe que cerca de 5 millones de trabajadores obtienen algún tipo de remuneración del campo. De éstos, el 56% son asalariados temporales. En conjunto, viven en las ciudades y trabajan en el campo, con jornadas indefinidas que varían según el ciclo de las recolecciones y la demanda de mano de obra. Son los llamados boias-frias. El 44% son asalariados rurales con trabajos fijos y, en general, más cualificados. Otros 470 mil son trabajadores rurales clasificados como *parceiros* y reciben un porcentaje de la producción obtenida, en especie. Todos juntos alcanzan a casi 5.500.000 personas. En las regiones del sur, sudeste y parte del centro-oeste, las relaciones productivas en el campo están más estructuradas y las preocupaciones de los trabajadores rurales son semejantes a las de todos los trabajadores en el mercado capitalista: mejores salarios y condiciones de trabajo, vivienda digna, transporte, salud, fiscalización del uso de agrotóxicos. En cambio, en las regiones del norte, noreste y noroeste, las relaciones están menos estructuradas y la situación de los trabajadores es mucho más precaria y librada al albur de la violencia de los hacendados.

Programas agrarios impulsados durante el gobierno de F.H.Cardoso

En 1995, el **Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar** (PRONAF) otorgó crédito en condiciones favorables para los pequeños agricultores familiares y las cooperativas y asociaciones de producción formadas por pequeños productores. Los recursos pueden ser para los costes de la cosecha, la actividad ganadera o las inversiones en maquinaria, equipamientos agrícolas, bienes de producción y otros. Su ejecución es descentralizada, aplicándose en los municipios por medio de acuerdos entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones de productores. El primer año de aplicación, el PRONAF benefició aproximadamente a 19 mil familias, la mayoría del noreste y de Rio Grande do Sul. En 1996, el programa concedió crédito a 333 mil familias. Para 1997 estaba previsto el acceso al crédito de 600 mil familias agrícolas.

También se puso en marcha el **Programa de Generación de Empleo y Renta Rural** (PROGER RURAL), con el objetivo de aumentar la producción, mejorar la productividad, crear más puestos de trabajo y fijar a los hombres en el campo. Se estima que en el período agrícola 95/96 los recursos aplicados garantizaron la generación y mantenimiento del empleo de 263.612 trabajadores.

Otro proyecto es el **Lumiar**, que se crea como un servicio descentralizado de apoyo técnico a las familias asentadas en los proyectos de reforma agraria. Es una iniciativa del gobierno federal pero está coordinada por el INCRA, el Ministerio de Agricultura, los bancos de Brasil, Nordeste y Amazonia, entidades representativas de los trabajadores rurales y una representación de los gobiernos estatales. El Proyecto Lumiar apunta a la formación de equipos locales de asistencia técnica y capacitación profesional, para orientar el desarrollo autónomo de los asentamientos. Cada grupo de trescientas familias dispondrá de un equipo local de cuatro profesionales y dos técnicos de nivel medio. El objetivo es que, por medio de un proceso de aprendizaje colectivo, los asentados consigan que sus asentamientos se autosustenten en el menor plazo posible. En 1997 se implantaron 40 equipos, la mayoría en la región del noreste, y estaba prevista la implantación de otros 250.

El **Proyecto Emancipar**, por su parte, tiene por objetivo asegurar a todo ciudadano emancipado del programa de reforma agraria el derecho a su independencia económica. Se considerará emancipado un asentamiento cuando su capacidad de recibir a nuevas familias esté agotada, su situación de propiedad definida, sus servicios y obras básicas ejecutadas o en ejecución y la comunidad integrada

social y económicamente a las economías local y regional. En 1997 el INCRA concentró sus trabajos en un grupo de 650 proyectos antiguos de colonización pública y de reforma agraria, abarcando a unas 180 mil familias.

El **Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo** (BID) es una experiencia piloto de apoyo al Programa de Emancipación, destinado a unas 25 mil familias, especialmente en las regiones del norte y nordeste del país. Además de financiar obras de infraestructura y protección ambiental, el BID intenta fortalecer la asistencia técnica y tecnológica a los agricultores. La financiación es de 150 millones de dólares por parte del Banco y 100 millones aportados por el país.

El **Proyecto Cédula de la Tierra**, negociado con el Banco Mundial-BIRD, parte de unos modelos de crédito cooperativo y su concreción está integrada a los mecanismos del mercado, sin depender del gobierno en todas las fases del proceso, especialmente en la ejecución. El sistema es que un grupo de agricultores sin tierra identifica un área en la que desea establecerse, realiza un proceso sumario de adquisición de la tierra y lo presenta a la unidad técnica del Estado. Si se aprueba, el grupo recibe el financiamiento para comprar la tierra, con un plazo de liquidación de 20 años.

El **Proyecto Casulo** es un programa de trabajo conjunto del gobierno federal con los estados y municipios para descentralizar y acelerar la ejecución de los proyectos de reforma agraria. Se trata de la elaboración de un censo de agricultores sin tierra y de terrenos públicos municipales y estatales disponibles o que puedan ser adquiridos. El gobierno federal garantiza los créditos y divide, con los estados y municipios, el financiamiento de la infraestructura social.

Otras acciones previstas son la elaboración del **Atlas Fundiário Brasileiro**, lanzado en 1996 y que revela la estructura de la propiedad de la tierra en el país. Y la integración del INCRA, a partir de 1996, en la red de Internet, poniendo a disposición del público todas las informaciones relativas al Programa Nacional de Reforma Agraria.

También se apuntan líneas alternativas, como el desarrollo del turismo ecológico, la cría de animales pequeños, la floricultura, el cultivo de legumbres y de frutas de mesa, por ejemplo. Se trata de actividades muy intensivas y de pequeña escala, que pueden proporcionar nuevas oportunidades a un conjunto de pequeños agricultores y propietarios que ya no consiguen ser ni agricultores ni ganaderos. La fuga de profesionales de las ciudades en busca de una mejor calidad de vida está también aumentando el mercado de trabajadores domésticos, con mejores condiciones de trabajo y salario. Esos caseros representan ya casi el 8% de la población económicamente activa del área rural.